



Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Distr. general
25 de octubre de 2012
Español
Original: francés

Comité contra la Desaparición Forzada

Segundo período de sesiones

Acta resumida de la primera parte (pública)* de la 15ª sesión**

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves 29 de marzo de 2012, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Decaux

Sumario

Reunión con los Estados Miembros de las Naciones Unidas

Reunión con los organismos y las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales e instituciones nacionales de protección de los derechos humanos

Reunión con las organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas

* No se levantó acta resumida de la segunda parte (privada) de la sesión.

** No se levantó acta resumida de las sesiones 10ª, 11ª, 12ª, 13ª y 14ª.

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Reunión con los Estados Miembros de las Naciones Unidas

1. **El Presidente** da la bienvenida a los participantes. Subraya lo importante que es para el Comité dedicar una sesión a reunirse con los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las instituciones y las organismos a que se hace referencia en el artículo 28 de la Convención y las organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones de familias, que son fundamentales para su trabajo.
2. En el primer período de sesiones se estableció un marco técnico con la aprobación del reglamento provisional, que se ha revisado posteriormente y será publicado en el sitio web del Comité, primero en inglés y luego en todos los idiomas oficiales. También se elaboraron tres instrumentos prácticos y se formularon directrices exhaustivas para ayudar a los Estados a preparar los informes que deben presentar dentro del plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Convención, es decir, en diciembre de 2012 a más tardar. En este sentido, el Comité espera comenzar el proceso de examen de los informes en 2013 y procurará no acumular retrasos. Se elaboró un formulario para facilitar el examen de la admisibilidad y el fondo de las comunicaciones relativas a los Estados que ya hayan hecho la declaración prevista en el artículo 31. Por último, un formulario relativo a las peticiones de actuación urgente (art. 30) facilitará la presentación de peticiones ante el Comité por todos los Estados partes. Posteriormente, el Comité se ocupará de las comunicaciones entre Estados previstas en el artículo 32, y ya ha reflexionado sobre un marco conceptual para la aplicación de los artículos 33 y 34. Conviene igualmente crear instrumentos de información y comunicación más sencillos destinados al público en general, y realizar en todos los países campañas de sensibilización e información sobre la Convención, que sigue sin ser bien conocida.
3. **El Sr. Trapp** (Francia) agradece que el Comité haya invitado a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y no solo a los Estados partes. Estos foros de discusión son muy importantes, puesto que permiten, entre otras cosas, que los Estados que aún no hayan ratificado la Convención comprendan cómo trabaja el Comité y se convenzan de la necesidad de ratificarla o, al menos, de adherirse a ella lo antes posible. La rapidez con la que se ha creado el Comité es digna de encomio. El hecho de reunirse con regularidad durante una semana permite al Comité tomar en consideración todas las cuestiones relacionadas con un instrumento particularmente denso como este. Los primeros trabajos del Comité son muy alentadores y prometedores.
4. Conviene distinguir el Comité del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, cuya creación fue una iniciativa que la Argentina, Francia y Marruecos presentaron al Consejo de Derechos Humanos. Mientras que el Grupo de Trabajo desempeña una labor humanitaria de vínculo entre los Estados y las víctimas, el Comité se asegura de que los Estados partes respeten la Convención. Francia insta a ambos órganos a que se pongan de acuerdo y trabajen en absoluta complementariedad. En los próximos meses se retomará la campaña destinada a promover la ratificación universal de la Convención, iniciada en 2010 por Francia con ayuda de la sociedad civil.
5. La incorporación de la Convención al derecho francés prosigue, y está previsto que próximamente se adopte el proyecto de ley que permitirá culminar esta tarea. Francia se compromete a presentar su informe dentro de los plazos establecidos. Para fomentar la sensibilización, Francia, en colaboración con la Universidad de París II, participa en la organización de un coloquio internacional sobre la Convención, que se celebrará en París el 15 de mayo de 2012.
6. **El Sr. Achgalou** (Marruecos) agradece que el Comité haya informado sobre su primer año de trabajo a todos los Estados Miembros, incluidos aquellos que no son parte en

la Convención. Esta reunión es de especial importancia para Marruecos, que prevé adherirse a la Convención en el transcurso de 2012. Dicha adhesión representa la culminación de la cooperación entre el Grupo de Trabajo y Marruecos, marcada por la visita del Grupo de Trabajo en 2009, durante la cual Marruecos se comprometió a poner fin a las desapariciones forzadas.

7. Puesto que existe el temor de que se produzca un solapamiento de los mandatos de ambos órganos, para disipar toda duda al respecto sería conveniente conocer los detalles sobre cómo va a trabajar cada uno para evitar duplicaciones.

8. **El Presidente** indica que el Comité ya se reunió con el Grupo de Trabajo en el primer período de sesiones. Ambos órganos publicaron entonces un comunicado conjunto y decidieron fortalecer sus vínculos oficiales y oficiosos. Un miembro del Grupo de Trabajo participará en la segunda parte del intercambio de opiniones, y la Sra. Janina, Vicepresidenta del Comité, asistirá a la conferencia sobre las mujeres y las desapariciones forzadas que el Grupo de Trabajo organizará en Addis Abeba. Asimismo, de acuerdo con las disposiciones de la resolución de la Asamblea General relativa a las desapariciones forzadas o involuntarias, los presidentes del Comité y del Grupo de Trabajo presentarán sus informes al mismo tiempo a la Asamblea General de las Naciones Unidas en otoño de 2012.

9. Más allá de los aspectos institucionales, la protección de las personas contra las desapariciones forzadas es un objetivo común del Comité y del Grupo de Trabajo. En ese sentido, ambos deben garantizar la coherencia de los conceptos y las definiciones y trabajar en estrecha colaboración, en particular cuando se trate de las observaciones generales o de la interpretación de los textos. Por otro lado, no puede haber competencia en términos de procedimientos, entre otras razones porque los ámbitos de competencia de ambos órganos están bien delimitados: el Grupo de Trabajo tiene un mandato humanitario muy amplio, que tiene una dimensión histórica, mientras que el Comité tiene un mandato cuasijurisdiccional, que solo tiene validez a partir de la ratificación. El Comité solo defiende los intereses de los Estados partes y únicamente toma en consideración las desapariciones forzadas que se hayan producido después de la ratificación. Quizá dentro de 20 años sea preciso racionalizar los procedimientos, pero actualmente hay suficiente trabajo para ambos órganos, que intentan desempeñar su labor con un espíritu positivo de cooperación y coherencia jurídica.

10. **El Sr. Huhle** añade que el Comité tiene la suerte de tener como secretaria a la antigua secretaria del Grupo de Trabajo, lo que representa una ayuda inestimable y permite una estrecha colaboración entre ambos órganos, de manera que el Comité puede apoyarse en los conocimientos del Grupo de Trabajo.

11. **El Sr. Alukaili Haidar** (Iraq) dice que el Iraq espera con interés las instrucciones del Comité relativas a la presentación de los informes, y a la manera de aplicar los artículos 2, 3 y 4, que disponen la tipificación como delito de la desaparición forzada. Desde la caída de la dictadura, en 2003, el Iraq atribuye una gran importancia a la cuestión de los derechos humanos. Con el apoyo de las Naciones Unidas y de los Estados amigos, el Gobierno ha adoptado importantes medidas para asegurar la protección y promoción de estos derechos: la Constitución garantiza ahora todos los derechos y las libertades fundamentales, se han aprobado o derogado leyes y se han creado instituciones de derechos humanos, como el Ministerio de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos.

12. El Iraq, convencido de la necesidad de poner fin a la lacra de las desapariciones forzadas, que la población sufre desde hace mucho tiempo, y consciente de que se sigue produciendo la desaparición de miles de personas, se ha adherido a la Convención, que forma parte integrante de la legislación nacional. Tras la caída de la dictadura, se han

aprobado varias leyes relativas a las desapariciones forzadas, entre las que cabe destacar la Ley de las fosas comunes, que establece mecanismos de cooperación y de tramitación de sumarios que conciernen a más de 500.000 víctimas del régimen depuesto y ha permitido realizar análisis de ADN. El Iraq procura también ofrecer una reparación y ayudar a las familias de las personas desaparecidas a encontrar a sus familiares facilitando la intervención de los equipos de inspección en las prisiones, intentando subsanar las deficiencias en la tramitación de los sumarios y reforzando la colaboración entre los Ministerios de Interior, Justicia y Defensa.

13. El Iraq agradece los esfuerzos realizados, y está seguro de que el Comité lo ayudará a completar la estructura establecida para hacer frente a las desapariciones forzadas y le transmitirá la experiencia y los conocimientos necesarios para tramitar los casos pendientes.

14. **El Sr. Silva** (Uruguay) comunica al Comité el pleno apoyo del Uruguay, que está orgulloso de que cuente con un uruguayo entre sus miembros. Al igual que Francia, el Uruguay estima que sería especialmente pertinente organizar un encuentro para dar a conocer mejor el trabajo del Comité, y, en el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en el que el Uruguay ocupará la presidencia, tiene previsto hacer una propuesta en este sentido. Asimismo, mientras el Comité contra la Desaparición Forzada no tenga una carga excesiva de informes, debería cooperar con los demás comités y reflexionar sobre cuál es la manera más racional de organizar sus trabajos, en beneficio de los Estados partes y de sus propias actividades.

15. **El Presidente** considera procedente en este momento que los miembros del Comité hagan una ronda de presentaciones, indicando las funciones que ocupan en su país.

16. **El Sr. Al-Obaidi** explica que trabaja en el ámbito de los derechos humanos desde 2003, y tiene experiencia en el campo de la legislación y los textos jurídicos. El Comité ha empezado a elaborar una base de datos, y recibirá los primeros informes en el transcurso del año.

17. **El Sr. Camara** dice que es juez en ejercicio en el Tribunal Supremo del Senegal. Destaca la importancia de que en las reuniones del Comité estén presentes representantes de los Estados partes y de los Estados que aún no son partes, puesto que la función del Comité se facilitará enormemente si los Estados partes cumplen las obligaciones que les atañen en virtud de la Convención, que consisten principalmente en adaptar su legislación nacional a las disposiciones de la Convención, perseguir a los responsables de desapariciones forzadas y llevarlos ante la justicia, y velar por la justa reparación de los daños sufridos por las víctimas.

18. **El Sr. Garcé García y Santos** recuerda las relaciones bidireccionales entre el Comité y los Estados, y subraya las tres nociones primordiales en las que se basa el Comité: independencia, autonomía y colaboración. Los Estados pueden consultar las directrices establecidas no solo para presentar los informes dentro de los plazos establecidos, sino también para que la información que contengan sea sustancial y pertinente. El Comité considera que no se trata únicamente de legislar, sino que también hay que velar por que las leyes estén bien elaboradas, sean coherentes y tomen en consideración las disposiciones de la Convención. Además, la colaboración entre los Estados y de los Estados con la sociedad civil es indispensable. En este sentido, el Uruguay ha colaborado con la Argentina en el caso *Gelman* relativo a la desaparición de una joven argentina en 1976, en el que había agentes uruguayos y argentinos implicados. Se trata de un ejemplo destacado de cooperación, puesto que el caso no se habría podido resolver sin la colaboración del Estado argentino y la participación de la sociedad civil. Por último, es fundamental que los Estados ratifiquen la Convención y reconozcan la competencia del Comité para recibir comunicaciones con arreglo a los artículos 31 y 32.

19. **El Sr. Hazan** afirma que, en el transcurso de los nueve últimos años, ha defendido la causa de los niños desaparecidos en la Argentina, como abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo. Es importante que el Comité mantenga la dinámica de colaboración instaurada. Los intercambios de opiniones con los Estados y otras partes interesadas permiten al Comité perfeccionar sus métodos de trabajo gracias a las propuestas formuladas. En cuanto a los informes que se esperan de los Estados partes, considera conveniente que el Comité reciba los informes lo antes posible, con el fin de que pueda empezar esta parte de su actividad en el próximo período de sesiones.

20. **El Sr. Huhle** actualmente es miembro del Instituto Alemán de Derechos Humanos. Pone de relieve el procedimiento de examen de las peticiones de actuación urgente que establece el artículo 30 de la Convención. Se trata de un procedimiento completamente nuevo, que podría permitir salvar vidas, y se insta a los Estados y particulares a que lo utilicen cuando consideren que la situación así lo requiere.

21. **La Sra. Janina** es jurista en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Albania. Desea hacer notar la cuestión de las mujeres y los niños, que están particularmente afectados por las desapariciones forzadas, y pide a los Estados partes que presten una atención especial a estos grupos vulnerables. En sus informes al Comité, los Estados partes deberán dejar constancia de las medidas adoptadas a este respecto y explicar si han establecido circunstancias agravantes para los responsables de la desaparición forzada de mujeres embarazadas o menores, como establece el artículo 7 b) de la Convención.

22. **El Sr. López Ortega** es juez del tribunal penal de Madrid. Desde su primer período de sesiones, el Comité ha atribuido una gran importancia a la elaboración de métodos de trabajo y de un reglamento que le permitirán cumplir su mandato con eficacia. La colaboración de los Estados partes será igualmente indispensable para ayudar al Comité a examinar las comunicaciones individuales y responder a las peticiones de actuación urgente.

23. **El Sr. Mulembe** se complace de la presencia de un gran número de Estados partes y subraya que la eficacia de los trabajos del Comité dependerá en gran medida de que aumente el número de adhesiones; lo ideal sería que alcanzase el 100%, habida cuenta del carácter universal del fenómeno de las desapariciones.

24. **El Sr. Yakushiji** es profesor de derecho internacional. Durante el presente período de sesiones, el Comité adoptará su reglamento y una serie de directrices para la presentación de informes en virtud del artículo 29. Espera que los primeros Estados en ratificar la Convención también sirvan de ejemplo a la hora de aplicarla. Pide a los representantes de los Estados partes que insten a sus gobiernos a presentar el primer informe en virtud del artículo 29 dentro de los plazos establecidos.

25. **El Presidente** es profesor de derecho internacional en la Universidad de París II. La composición del Comité, que cuenta con diez expertos, permite disfrutar de diversidad geográfica e intelectual y, al mismo tiempo, conservar un espíritu colegiado que propicia un trabajo colectivo eficaz. El Presidente firmó a título personal el documento final de la reunión de Dublín II relativo al proceso de fortalecimiento de los órganos de tratados ya en el primer período de sesiones, y el Comité ha decidido en el segundo período de sesiones apoyar este documento a título colectivo. En aras del fortalecimiento y la coordinación, el Comité ha elaborado su reglamento tomando en consideración las mejores prácticas de los demás órganos de tratados, y las innovaciones de la Convención.

Se suspende la sesión a las 11.00 horas y se reanuda a las 11.10 horas.

Reunión con los organismos y las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales e instituciones nacionales de protección de los derechos humanos

26. El Sr. El Hajjé (Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias) considera que el mandato del Comité contra la Desaparición Forzada completa debidamente los mecanismos de protección de los derechos humanos en el ámbito de las desapariciones forzadas. Todo apunta a que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas responde a las expectativas de la comunidad internacional. El Grupo de Trabajo, creado en virtud de la resolución 20 (XXXVI) de la Comisión de Derechos Humanos, tiene vocación universal. Primero tuvo un mandato humanitario que consistía en actuar como intermediario entre las familias de las víctimas, las fuentes de información y los Estados implicados con el fin de determinar la suerte de la víctima y su paradero. Posteriormente, antes de la adopción de la Convención, también se encargaba de vigilar la aplicación de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por parte de los Estados.

27. La "desaparición forzada", definida con precisión en el preámbulo de la Declaración, no abarca los actos de privación de libertad cometidos por personas sin una relación directa o indirecta con el Estado o sus órganos y que no hayan recibido su consentimiento explícito o implícito.

28. El Grupo de Trabajo sigue un método bien definido, que consiste en determinar si las peticiones que recibe cumplen las seis condiciones de admisibilidad. Cuando una comunicación se considera admisible, el Grupo de Trabajo puede iniciar bien un procedimiento de urgencia, cuando el delito se haya cometido en el transcurso de los tres meses anteriores a la recepción de la petición, bien el procedimiento habitual, que se aplica a los casos acontecidos más de tres meses antes de la recepción de la petición. El Grupo de Trabajo presta una atención especial a los casos que conciernen a personas vulnerables, en particular mujeres, niños y personas de avanzada edad.

29. El Grupo de Trabajo considera pendientes los casos que no hayan sido aclarados, a los que no se haya puesto fin o cuyo examen no se haya suspendido. Considera que un caso está aclarado cuando se ha determinado claramente la suerte de la víctima o su paradero, y las investigaciones llevadas a cabo por todas las partes han aportado información detallada, principalmente en el marco de misiones de investigación realizadas sobre el terreno por organizaciones internacionales, con independencia de que la persona en cuestión esté viva o muerta. Un caso se da por terminado cuando las autoridades competentes emiten una declaración de ausencia como consecuencia de una desaparición forzada o una declaración de presunto fallecimiento, y los allegados de la víctima o de otras partes interesadas expresan libre y categóricamente su voluntad de no continuar con la investigación. El derecho a una indemnización integral debe respetarse en cualquier caso. De manera excepcional, el Grupo de Trabajo puede decidir interrumpir el examen de un caso si la familia de la víctima expresa libre y categóricamente su voluntad de no continuar con la investigación, o si la fuente ya no está en condiciones de actuar o ha desaparecido y el Grupo de Trabajo no ha conseguido encontrar otra que la sustituya. Cuando la fuente aporta información que indica claramente que se ha archivado un caso sin el debido seguimiento o se ha puesto fin a su examen por error, el Grupo de Trabajo reabre el caso y deja constancia al respecto en su informe anual al Consejo de Derechos Humanos.

30. El Grupo de Trabajo dispone de otros mecanismos de protección: los llamamientos urgentes, que tienen lugar cuando, por ejemplo, existen alegaciones que indican que se ha detenido a una persona, que ha sido víctima de una desaparición forzada o corre el riesgo de desaparecer; la intervención inmediata, indicada principalmente en caso de persecución de los allegados de una víctima de desaparición forzada; y las alegaciones generales, que el Grupo de Trabajo pone periódicamente en conocimiento de los gobiernos afectados,

invitándolos a examinarlas. También recurre a la cooperación con los demás mecanismos de derechos humanos.

31. El Grupo de Trabajo realiza visitas a los países para intensificar el diálogo con las autoridades implicadas y las familias de las víctimas, aclarar los casos de desaparición forzada que hayan sido puestos en su conocimiento y estudiar las prácticas que siguen los gobiernos para esclarecer dichos casos, aplicar la Declaración y proteger los derechos de las víctimas.

32. El Grupo de Trabajo presenta cada año al Consejo de Derechos Humanos un informe sobre todas las actividades dimanantes de su mandato, incluidas las visitas a países y cualquier otra información pertinente. Publica igualmente comunicados de prensa y observaciones generales, en las que ofrece una visión general de la situación en el mundo respecto de las desapariciones forzadas y su propia interpretación de los artículos de la Declaración. También formula recomendaciones relativas a la aplicación de la Declaración, los obstáculos encontrados y las medidas que deben adoptar los Estados para prevenir las desapariciones forzadas o remediar la situación, o una vez que se ha producido la desaparición. Para el Grupo de Trabajo, la desaparición forzada es un delito autónomo y continuado, que vulnera prácticamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los de los allegados y familiares de la víctima. El Sr. El Hajjé está seguro de que el Grupo de Trabajo y el Comité contra la Desaparición Forzada sabrán unir sus fuerzas para cumplir con rapidez y eficacia su mandato, cuyos objetivos principales son salvar a las víctimas de desapariciones forzadas, ayudar a sus familias y personas allegadas y llamar la atención de los Estados sobre sus obligaciones en materia de defensa de los derechos humanos.

33. **La Sra. Moodie** (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)) dice que el UNICEF se complace en colaborar con el Comité contra la Desaparición Forzada. Con arreglo a su mandato, el Fondo colabora regularmente con el Comité de los Derechos del Niño, principalmente en la elaboración de las observaciones generales, y contribuye activamente a la elaboración de los informes que los Estados partes deben presentar a ese Comité. Además, el UNICEF está estableciendo colaboración con los órganos de tratados internacionales con los que todavía no colaboraba. Si bien, de manera general, las actividades del UNICEF no abarcan específicamente la cuestión de las desapariciones forzadas, sus oficinas en determinados países se ven en la necesidad de trabajar sobre esta cuestión. En un momento en que el Comité va a empezar a examinar los informes de países, el UNICEF tiene previsto que sus oficinas en los países presten más atención a la cuestión de las desapariciones forzadas. Está dispuesto a prestar al Comité todo el apoyo que este considere oportuno.

34. **El Sr. Ojeda** (Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)) dice que el CICR ha prestado su apoyo a la Convención desde el principio invitando a los Estados a que la ratifiquen y la pongan en práctica, como lo demuestra la declaración realizada en 2006 por el Vicepresidente del CICR ante el Consejo de Derechos Humanos. El CICR promueve igualmente este instrumento en el seno de otras instituciones multilaterales, como el Consejo de Europa. La Convención desempeña un papel fundamental en la prevención de las desapariciones forzadas, y el CICR hace uso de la misma en sus diálogos con las autoridades competentes. El CICR se complace en poder colaborar con el Comité y compartir con él sus competencias, principalmente en lo relativo a la cuestión de las personas desaparecidas, a fin de responder lo mejor posible a las necesidades de las familias de estas personas.

35. **El Sr. Forst** (Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (CIC)) observa que, como órganos creados en virtud de la constitución o de la ley, las instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos tienen, entre las funciones que su

mandato les confiere, la responsabilidad de investigar las violaciones de los derechos humanos, publicar informes, realizar labores de vigilancia y prestar asesoramiento jurídico y político a los Estados para garantizar que se respeten los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su mandato nacional y sus relaciones internacionales sitúan a estas instituciones en una posición privilegiada para apoyar el trabajo de los órganos de tratados. Pueden facilitarles información independiente y creíble sobre la situación en los países y promover la ratificación de los instrumentos internacionales, entre ellos, la Convención. Son un elemento esencial en el seguimiento de las recomendaciones de los órganos de tratados en el plano nacional, y actualmente están trabajando en la armonización de sus métodos de trabajo a este respecto. El CIC y sus miembros se congratulan por haber tenido la oportunidad de reunirse con el Comité contra la Desaparición Forzada para estudiar las posibilidades y modalidades de cooperación entre el Comité y las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos.

37. El CIC hace notar con gran satisfacción que se menciona expresamente a las instituciones nacionales de derechos humanos en el reglamento del Comité, que prevé que las instituciones nacionales puedan presentar documentos escritos y hacer declaraciones orales y escritas en los períodos de sesiones del Comité, incluso, cuando sea posible, por videoconferencia. Con el objetivo de fortalecer aún más la cooperación entre los dos órganos, el CIC desea que el Comité contra la Desaparición Forzada autorice la contribución de las instituciones nacionales de derechos humanos a sus trabajos en todas las fases, en particular en lo referente al procedimiento de intervención urgente dispuesto en el artículo 30, los procedimientos de seguimiento, los procedimientos de comunicación y las visitas a los países. El CIC reconoce el papel fundamental del Comité en la elaboración de directrices, entre ellas las observaciones generales, para los Estados y otras partes interesadas en la puesta en práctica efectiva de la Convención en el plano nacional. Invita al Comité a velar por que sus métodos de trabajo permitan que todas las partes interesadas tengan una participación efectiva y sean consultadas. El CIC y las instituciones nacionales de derechos humanos se han comprometido a apoyar la importante labor emprendida por el Comité y esperan con interés una cooperación fructífera que contribuya a fortalecer la protección de los derechos humanos sobre el terreno.

38. **El Presidente** toma nota de las sugerencias de las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos relativas a su participación en las diferentes fases del procedimiento. Cuando elaboró su reglamento, el Comité se planteó si sería posible utilizar la práctica de los *amici curiae*, habida cuenta de la confidencialidad que requieren las peticiones de actuación urgente presentadas en virtud del artículo 30 de la Convención. Desearía saber si los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias prevén la utilización de este procedimiento de consulta extraordinaria, o si hay instituciones nacionales de derechos humanos con experiencia en este sentido.

39. **El Sr. El Hajjé** (Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias) señala que los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo no mencionan la práctica de los *amici curiae* con las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos, lo que es comprensible, ya que estas instituciones aún no existían cuando se creó el Grupo de Trabajo. Con todo, esta práctica se aplica con las ONG o fuentes que denuncian desapariciones forzadas. El Sr. El Hajjé planteará la cuestión de este procedimiento de consulta extraordinario en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

40. **El Sr. Garcé García y Santos** precisa que el Comité ha establecido con el Grupo de Trabajo una fructífera colaboración desde el primer período de sesiones, lo que debería permitir a ambos órganos trabajar conjuntamente en la consecución de su objetivo común, preservando al mismo tiempo su independencia. Le complace que se haya mencionado el papel preventivo de la Convención, puesto que se trata, en efecto, de un factor fundamental

para alentar a los Estados a que ratifiquen la Convención y reconozcan la competencia conferida al Comité en virtud de los artículos 31 (examen de las comunicaciones presentadas por particulares) y 32 (examen de las comunicaciones presentadas por Estados partes).

41. **El Presidente** considera que convendría saber cómo las ONG contemplan la cuestión del *amicus curiae*, y señala que la dificultad reside en encontrar el equilibrio adecuado entre transparencia y confidencialidad.

42. **El Sr. Forst** (CIC) indica que ya hay varias instituciones nacionales de protección de los derechos humanos que actúan como *amici curiae*, individual o colectivamente. El Grupo Europeo de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos actúa en esa calidad desde hace varios años ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las prácticas establecidas permiten preservar la confidencialidad. Actualmente, el CIC está reflexionando al respecto con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y podría resultar conveniente que ambos comités examinasen juntos la cuestión.

43. **El Sr. Relva** (Amnistía Internacional) dice que los *amici curiae* constituyen una práctica positiva. Amnistía Internacional ya ha presentado informes en calidad de *amicus curiae* ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, y también espera poder hacerlo, en el futuro, ante la Corte Internacional de Justicia.

44. **El Presidente** dice que habría que estudiar la posibilidad de publicar en el sitio web del Comité un resumen de las comunicaciones, aportando las indicaciones necesarias para que la figura del *amicus curiae* sea útil, sin dar por ello demasiadas precisiones sobre la víctima o las demás personas afectadas.

45. **El Sr. Huhle** considera que sería interesante para el Comité, como órgano recientemente creado, escuchar algunas observaciones relativas al fortalecimiento del sistema de los órganos de tratados.

46. **La Sra. Moodie** (UNICEF) dice que el UNICEF apoya el fortalecimiento del sistema de órganos de tratados y que en el documento final de la reunión de Dublín II se prevén soluciones convenientes al respecto.

47. **El Sr. Forst** (CIC) señala que las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos tienen una cierta práctica en este ámbito y han formulado algunas recomendaciones en este sentido, en particular en la Declaración de Marrakech relativa al fortalecimiento de los órganos de tratados y las posibilidades de cooperación con la sociedad civil y las instituciones nacionales. Este documento podría ser pertinente para el Comité.

48. **El Presidente** agradece a los participantes sus contribuciones tanto sobre las cuestiones de organización como sobre las cuestiones temáticas. El Comité no dudará en consultar a las instituciones que representan, que tienen una gran experiencia en las esferas que abarca el mandato del Comité.

Se suspende la sesión a las 11.55 horas y se reanuda a las 12.05 horas.

Reunión con las organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas

49. **El Presidente** dice que el Comité celebra poder reunirse con todas las partes interesadas, en particular las ONG, las asociaciones de familias y los representantes de la sociedad civil. Las ONG presentes sobre el terreno desempeñan una importante labor, puesto que pueden transmitir al Comité información en virtud de los artículos 30 o 31 que

permita poner en marcha un procedimiento cuasijudicial. El Comité deberá ejercer con discernimiento las atribuciones que le han sido conferidas de conformidad con los artículos 30 (actuar de manera urgente), 31 (competencia del Comité para examinar las comunicaciones presentadas por particulares), 33 (visitas a los países) y 34 (presentación de cuestiones a la Asamblea General), cuando las circunstancias lo requieran. El Comité aún no está en condiciones de elaborar observaciones generales, pero ha comenzado una reflexión general sobre diferentes temas, como la responsabilidad de los agentes no estatales y la responsabilidad principal del Estado en caso de desapariciones forzadas atribuidas a agentes no estatales. El Comité espera mantener una colaboración eficaz con las partes interesadas, habida cuenta de que todas desempeñan un papel particular.

50. **El Sr. Relva** (Amnistía Internacional) considera preocupante que, cinco años después de la aprobación de la Convención por la Asamblea General, solo 31 Estados la hayan ratificado. El Comité debería alentar a los Estados a que ratifiquen o se adhieran a este instrumento. Asimismo, cabría recordar a los Estados que no deben hacer declaraciones interpretativas susceptibles de constituir reservas prohibidas, como la que hizo Alemania sobre el artículo 24, o, de haberlo hecho ya, que las retiren cuanto antes. El Comité no debería interpretar la ausencia de objeciones de los Estados partes como una declaración unilateral contraria al objeto y propósito de la Convención como una aceptación de dicha declaración. No debería en ningún caso verse limitado en el ejercicio de sus atribuciones por las declaraciones de los Estados partes, y debería hacer su propia interpretación de la Convención, con total independencia. A Amnistía Internacional también le preocupa que solo 12 Estados hayan reconocido la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas y que aleguen ser víctimas de violaciones de las disposiciones de la Convención. El Comité tal vez desee plantear esta preocupación a los Estados partes que no hayan hecho las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32. También suscita inquietud que la gran mayoría de los Estados partes no aplique las disposiciones de la Convención. Amnistía Internacional ha elaborado una lista de los principios que hay que respetar para aplicar la Convención de manera efectiva, y en la que se detallan las obligaciones de los Estados partes en virtud de la Convención y lo que Amnistía Internacional les recomienda para respetar las normas más rigurosas del derecho internacional. La lista de principios pretende ayudar a los Estados a determinar rápidamente si sus jurisdicciones o autoridades están en condiciones de aplicar las disposiciones particulares de la Convención, o si es necesario elaborar nuevos textos o modificar la legislación existente.

51. En lo relativo a la transmisión de las recomendaciones (artículo 60 del reglamento), tal vez sea conveniente que el Comité pueda transmitir los casos de represalias contra los allegados de las personas desaparecidas no solamente a las autoridades competentes del Estado parte, sino también a otras partes interesadas, como los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, el Secretario General de las Naciones Unidas o el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En cuanto a las observaciones finales, es importante publicarlas inmediatamente una vez transmitidas al Estado parte, y el Comité tal vez desee precisarlo en el artículo 52 del reglamento, que trata sobre el seguimiento de las observaciones finales. En relación con el examen de las comunicaciones presentadas por particulares en virtud del artículo 31, aunque la Convención disponga que dicho examen se celebre a puerta cerrada, no impone la confidencialidad de todos los aspectos del procedimiento. Convendría que el Comité examinase a qué elementos del procedimiento se les podría dispensar un trato más abierto y transparente que el previsto actualmente en los artículos 63 a 78 del reglamento. Tal vez sería posible, por ejemplo, que el Comité, respetando la confidencialidad inherente al examen de la comunicación y, cuando proceda, el anonimato del autor, estableciese una lista de las comunicaciones que se están examinando, indicando brevemente el objeto de la comunicación, los artículos de la

Convención invocados y el Estado parte afectado. Esta práctica permitiría que las terceras partes interviniesen con mayor eficacia.

52. En cuanto a las visitas a los países en virtud del artículo 33, se han dado casos de titulares de mandatos de los procedimientos especiales que reciben numerosas quejas denunciando violaciones graves de los derechos humanos, pero no pueden desplazarse sobre el terreno para examinar la situación porque el Estado les deniega la visita. No obstante, eso no les ha impedido hacer públicas las quejas bien fundadas. Amnistía Internacional insta al Comité a que reflexione sobre las medidas que podría adoptar en casos similares. La organización ha previsto realizar una campaña de dos años para promover la ratificación de la Convención en diez países de cinco regiones del mundo, y alentar a los Estados a que hagan las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención.

53. **El Presidente** dice que el Comité comparte las preocupaciones expresadas con relación al número de ratificaciones. Es preciso crear una verdadera dinámica e instar a los Estados a que hagan las declaraciones en las que reconocen la competencia del Comité, como disponen los artículos 31 y 32 de la Convención, en el momento de la ratificación. Se ha remitido una carta a todos los Estados Miembros para señalar a su atención esta cuestión. El Comité aprovechará todas las oportunidades para reiterar este llamamiento. La organización de campañas específicas al respecto por parte de las ONG y las instituciones nacionales no puede sino facilitar la consecución de dicho objetivo.

54. Con relación al artículo 33 de la Convención, el Comité ha previsto el caso de que un Estado cuestionado no desee autorizar la visita de los miembros del Comité. En ese caso, el Comité podrá celebrar audiencias fuera del país. La desautorización de la visita no le impedirá hacer su trabajo y redactar un informe. Asimismo, las disposiciones del artículo 34 se refieren a un nivel de gravedad superior a las del artículo 33. El Presidente aprueba la idea de presentar un resumen de las comunicaciones.

55. **El Sr. Huhle** pide al Sr. Relva que dé más detalles sobre las objeciones de Amnistía Internacional a la declaración de Alemania y explique en qué sentido esta declaración podría constituir una reserva. Esta información se tomará en consideración al examinar el informe de Alemania.

56. **El Sr. Hazan** acoge con interés la propuesta de que el Comité elabore una lista de comunicaciones objeto de examen, que también incluiría un resumen y la mención del Estado parte afectado. Desearía saber a qué tipo de intervenciones se refiere el Sr. Relva cuando afirma que esta práctica permitiría que las terceras partes mejorasen la eficacia de sus intervenciones ante el Comité. Añade que la práctica del *amicus curiae* podría facilitar las deliberaciones anteriores al examen de un informe y las preguntas del Presidente a las demás partes interesadas.

57. **El Sr. Relva** (Amnistía Internacional) reafirma que la práctica del *amicus curiae* haría que el proceso fuese más transparente y permitiría que las ONG pusiesen en conocimiento del Comité sus opiniones sobre los casos señalados y sobre cómo habría que interpretar la Convención.

58. **La Sra. Jeannin** (Federación Internacional de la Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT)) acoge con agrado la decisión del Comité de dedicar el primero de sus debates temáticos a la cuestión de las mujeres y los niños víctimas de desapariciones forzadas. Pregunta si el debate que figura en el programa de la 16ª sesión será abierto al público, y si se prevé consultar a la sociedad civil en alguna fase del procedimiento. La FIACAT estima que la participación de la sociedad civil en la elección de los temas para los debates temáticos y su participación en los propios debates no puede sino enriquecer el trabajo del Comité. Insta al Comité a que abra en los próximos meses un

proceso participativo donde se invite a los representantes de la sociedad civil a expresar sus opiniones y presentar sus propuestas.

59. La FIACAT destaca la importancia crucial de las visitas a los países que pueda realizar el Comité. Siempre que sea posible, se deberán anunciar las visitas planificadas con mucha antelación para permitir que la sociedad civil participe de manera cabal. Se insta al Comité a que promueva la aplicación efectiva de la Convención mediante leyes internas de los Estados partes y elabore líneas directrices e instrumentos que ayuden a los Estados partes en este sentido.

60. **El Presidente** dice que el debate temático no se desarrollará en sesión pública porque los miembros del Comité han preferido mantener una reflexión entre ellos sobre los métodos y la organización de los trabajos, en particular tomando en consideración los demás procesos. En esta etapa sería totalmente prematuro que el Comité formulase observaciones generales. Deberá hacer declaraciones más sencillas y más conceptuales para aclarar algunas cuestiones relativas a la Convención, en particular la noción de víctima y la problemática de los agentes no estatales. Cuando el Comité tenga documentos de trabajo, los presentará a la sociedad civil y a todas las partes interesadas.

61. Además de un procedimiento tan jurídico como el del *amicus curiae*, hay otras maneras de que las ONG y las partes interesadas ayuden al Comité transmitiéndole información. Tanto las instituciones nacionales como las ONG desempeñarán un papel fundamental en todas las etapas del examen de los informes —preparación, debate y seguimiento. Asimismo, el Comité tiene la posibilidad de recibir información por otros medios además de los previstos en el artículo 31, que establece un procedimiento cuasijudicial. En este sentido, los artículos 33 y 34 hacen referencia a información que procederá de las ONG. Hay toda una serie de canales de comunicación que las ONG, ya sean generalistas, especializadas o dedicadas a labores sobre el terreno, pueden utilizar para hacer llegar la información al Comité.

62. **La Sra. Hearn** (Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)) pregunta sobre el contenido de las deliberaciones mantenidas por el Comité en sesión privada en relación con la estrategia para obtener la ratificación y la elaboración de leyes modelo (tema 6 c) del programa). Desearía saber si el Comité prevé elaborar leyes modelo sobre las desapariciones forzadas y, de ser así, por qué modalidades se regirá la participación de las ONG en tal proceso.

63. **El Presidente** responde que el Comité ha definido toda una serie de pistas concretas para dar a conocer mejor la Convención. Además del reglamento provisional y los instrumentos metodológicos, existe un tercer nivel que es el de la comunicación y la información destinada al público en general. Hay que actualizar el folleto informativo sobre las desapariciones forzadas y elaborar pequeños fascículos que expliquen de manera muy sencilla cómo utilizar la Convención. La estrategia consiste igualmente en sensibilizar a los propios Estados, más concretamente mediante talleres en el plano regional, pero también a través de iniciativas universitarias. El Comité aprovechará todas las ocasiones para dar a conocer la Convención y explicar la utilidad y el funcionamiento de este instrumento tan complejo. La lista de principios elaborada por Amnistía Internacional es de gran utilidad a este respecto.

64. Los Estados en ocasiones creen que las obligaciones dimanantes de la Convención son demasiado difíciles de incorporar a su derecho interno. Por consiguiente, las leyes modelo podrían ser útiles, pero el Comité nunca se ha planteado adoptar un modelo único. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha establecido un compendio de buenas prácticas que prevé diferentes variantes en función de los modelos jurídicos. Tras el examen de los informes periódicos, el Comité deberá a su vez recopilar las buenas prácticas. Asimismo, una vez concluidos los talleres regionales, podrá

determinar si hay leyes que puedan servir de modelo. No obstante, no basta con un modelo de ley penal, ya que hay numerosos elementos de la Convención que se derivan del derecho civil.

65. **El Sr. Garcé García y Santos** desea poner de relieve los elementos de la Convención que atañen a la prevención, más concretamente los artículos 16 a 18. En lo referente a la estrategia de trabajo, los miembros del Comité insisten en subrayar la necesidad de promover el diálogo regional y dar un impulso a los mecanismos nacionales de prevención. En lo que respecta a América Latina, es evidente que conviene dar prioridad a Centroamérica y a México.

66. **El Sr. Hazan** constata que numerosos documentos enviados por organizaciones de la sociedad civil en el marco del proceso de fortalecimiento de los órganos de tratados mencionan la cuestión del *amicus curiae*. Pregunta a los participantes si convendría que el Comité incluyese entre sus prácticas los mecanismos de solución amistosa.

67. **El Sr. Relva** (Amnistía Internacional) dice que Amnistía Internacional considera que los mecanismos de solución amistosa son muy positivos, pero, en principio, sus efectos son neutros. Si el Estado en cuestión se limita a reconocer que se ha producido un caso de desaparición forzada, no es suficiente. Por el contrario, se puede aceptar la solución amistosa si el Estado se compromete a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada y toma las medidas necesarias para ofrecer una reparación y una indemnización, localizar los cuerpos de las víctimas, garantizar que no se vuelva a repetir, indemnizar y modificar la legislación. Todo dependerá de la interpretación que haga el Comité.

68. **El Presidente** pregunta a las ONG cuál es su posición respecto del fortalecimiento de los órganos de tratados y del proceso establecido con la creación de un grupo de trabajo por la Asamblea General. ¿Se han acogido favorablemente estas iniciativas de coordinación o se las considera una amenaza para los comités especializados e independientes?

69. **La Sra. Jeannin** (FIACAT) dice que una de las inquietudes que suscita el proceso iniciado en Nueva York concierne al lugar que ocupan las ONG en el mecanismo establecido. En marzo se publicó una comunicación de las ONG al respecto, que contiene cuatro recomendaciones para facilitar la participación de las ONG en el proceso.

70. **El Sr. Huhle** señala que durante el semestre transcurrido desde el primer período de sesiones del Comité, y a pesar de los casos de desapariciones forzadas constatados, el Comité no ha recibido comunicación alguna relacionada con los artículos 30 o 31 de la Convención. Seguramente ello se debe en parte al hecho de que el Comité aún no haya publicado los procedimientos relativos al registro de las comunicaciones presentadas por particulares en virtud de esos dos artículos, lo que quedará resuelto al final del período de sesiones en curso. Asimismo, las víctimas y las ONG aún no conocen bien la Convención ni la labor del Comité. Sea como fuere, el Comité depende enormemente de las ONG, al ser canales habituales de recepción de comunicaciones presentadas por particulares.

71. **La Sra. Meraz** (Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)) precisa que, a partir del año en curso, la OMCT comenzará a promover la presentación de comunicaciones al Comité en virtud de los artículos 30 y 31. Acoge con satisfacción la elaboración de directrices para la presentación de casos de desapariciones forzadas.

72. **El Presidente** dice que, nada más concluir el período de sesiones, el Comité publicará rápidamente la información en su sitio web. Los acontecimientos se están desarrollando muy rápido: uno de los primeros Estados en firmar la Convención ha sido recientemente objeto de un golpe de estado. Para saber si esta situación ha conllevado desapariciones forzadas, evidentemente hay que observar la situación sobre el terreno.

La primera parte (pública) de la sesión concluye a las 12.50 horas.